

Roj: SAP TF 1/2013
Órgano: Audiencia Provincial. Tribunal Jurado
Sede: Santa Cruz de Tenerife
Sección: 100
Nº de Recurso: 2/2012
Nº de Resolución: 67/2013
Fecha de Resolución: 26/02/2013
Procedimiento: PENAL - JURADO
Ponente: MARIA JESUS GARCIA SANCHEZ
Tipo de Resolución: Sentencia

Encabezamiento

SENTENCIA

MAGISTRADA- PRESIDENTE

D^a. MARÍA JESÚS GARCÍA SÁNCHEZ.

En Santa Cruz de Tenerife, a 26 de febrero de 2013.

Vista en esta Audiencia Provincial, en nombre de S.M. el Rey, la causa correspondiente al rollo número [2/2012](#) del Tribunal del Jurado, procedente del Juzgado de Instrucción nº 2 (antiguo Mixto 7) de Arona, por delito de asesinato, seguida ante un Tribunal de Jurado, presidido por la Magistrada de esta Audiencia, la Ilma. Sra. Dña. MARÍA JESÚS GARCÍA SÁNCHEZ, en la que han participado como jurados las siguientes personas:

TITULARES

- 1.- D./Dña. Tomasa ..
- 2.- D./Dña Delfina .
- 3.- D./Dña. Jose Miguel .
- 4.- D./Dña. Rebeca .
- 5.- D./Dña. Benito .
- 6.- D./Dña. Geronimo .
- 7.- D./Dña. Coro .
- 8.- D./Dña. Natividad .
- 9.- D./Dña. Angelica .

SUPLENTE

1.- D./Dña. Laura .

2.- D./Dña. María Milagros .

En esta causa penal ha comparecido en calidad de acusado D. Jose Carlos , con nº de Pasaporte NUM000 , de nacionalidad búlgara, nacido el NUM001 /1983, en Ruse (Bulgaria), hijo de VALENTIRADEV y de SILVIA, en situación de prisión provisional desde el 13 de mayo de 2011, quien está representado por la Procuradora DÑA. SOFÍA N. HERNÁNDEZ MORERA y defendido por el Letrado D. FRANCISCO BELTRÁN AROCA; habiendo renunciado la acusación particular en su día personada en autos, y habiendo intervenido como parte acusadora el Ministerio Fiscal en el ejercicio de la Acusación Pública que tiene asignada por Ley, sin que se plantease cuestión previa alguna por las partes, por lo que se está en el momento de dictar la presente resolución.

I.-ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO .- Por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 2, Antiguo Mixto Nº 7 de Arona, como consecuencia del auto de Apertura de Juicio Oral de 30 de julio de 2012 se remitió a esta Audiencia Provincial, el procedimiento de la Ley del Jurado seguido en ese Juzgado con el número 1/2011, contra D. Jose Carlos por el supuesto delito de asesinato, siendo turnada la causa a esta Sección.

Las diligencias penales de referencia, tramitadas por el Juzgado de Instrucción Nº 2 de Arona, antiguo Mixto 7, fueron incoadas como consecuencia de la diligencia de levantamiento del cadáver llevada a cabo a las 11:25 horas del día 13 de mayo de 2011 y atestado de la misma fecha, habiendo sido calificados los hechos por el Ministerio Fiscal como constitutivos de un delito de asesinato del art. 138 y 139.1ª del C.P. concurriendo la circunstancia eximente del art. 20.1 del C.P., interesándose por el Ministerio Público la imposición de la medida de seguridad de veinte años de internamiento al acusado, Jose Carlos , en establecimiento adecuado al tipo de enfermedad psíquica que padece, así como que indemnice a los herederos de Africa en la cantidad de 200.000 euros, con aplicación de lo dispuesto en el art. 576 de la LEC. Por la Defensa del acusado Jose Carlos , se negaron los hechos narrados por el Ministerio Fiscal en su escrito de conclusiones provisionales, admitiendo el padecimiento del acusado de una esquizofrenia paranoide crónica y con persistencia de un núcleo delirante, durante al menos el mes de mayo de 2011 en el que se encontraba en fase aguda, produciéndole una anulación total de sus facultades intelectivas y volitivas, con abolición del juicio de la realidad, interesando la libre absolució del acusado con todos los pronunciamientos favorables.

SEGUNDO.- Tras la personación de las partes ante esta Sección de la Audiencia y repartida la causa al Magistrado Presidente que por turno correspondía, mediante Auto de fecha 12 de noviembre de 2012 se fijaron los hechos justiciables, se efectuó declaración sobre la pertinencia de las pruebas propuestas, se señaló para el comienzo de la vista del juicio oral el día 18 de febrero de 2013, a las 9:45 horas; y asimismo se ordenó la celebración del sorteo para la elección de candidatos a Jurado.

TERCERO.- Realizados los trámites correspondientes y tras la práctica de la vista de las excusas planteadas por los candidatos a jurado, resueltas oportunamente, llegado el día señalado para la celebración del acto del juicio, se

constituyó el Jurado y se dió comienzo al juicio oral del modo que figura en el acta del juicio, desarrollándose durante los días 18, 20 y 21 de febrero de 2012.

CUARTO .- El Ministerio Fiscal elevó a definitivas sus conclusiones provisionales modificando mínimamente el relato de hechos sin alterarlo en lo sustancial, es decir, manteniendo la calificación de los hechos como un delito de asesinato delart. 138. y139.1ª del C.P., del que considera autor al acusado, con apreciación de la circunstancia eximente completa delart. 20.1 del C.P. La Defensa del acusado, en igual trámite, solicitó la libre absolución del acusado, e introdujo alternativamente a tal pronunciamiento la calificación de los hechos como constitutivos de un delito de asesinato delart. 138y139.1ª del C.P., declarando autor de los hechos al acusado con arreglo alart. 27y28 del C.P, y concurriendo en el mismo la circunstancia eximente delart. 20.1 del C.P., difiriendo únicamente de las conclusiones definitivas efectuadas por el Ministerio Fiscal en lo relativo a la duración de la medida de seguridad de internamiento, solicitando la duración de quince años frente a los veinte que solicitó el Ministerio Fiscal en su escrito de conclusiones definitivas, y respecto a la responsabilidad civil derivada de los hechos, respecto de la que no se pronunció la Defensa mientras que el Ministerio Fiscal la cifró en la cantidad de 200.000 euros con los intereses delart. 576 de la LEC.

QUINTO.- Tras los correspondientes informes del Ministerio Fiscal y Defensa, en apoyo de sus respectivas pretensiones, por su S.S. Iltma. se preguntó al acusado si tiene algo más que alegar o añadir a los expuesto por su abogado, manifestando que "si lo que solicita su Letrado es el mínimo de 15 años y que es Jesucristo".

SEXTO.- Terminado el Juicio Oral, de conformidad con elart. 53 de la LOTJ, antes de entregar a los Jurados el escrito con el objeto del veredicto, se oyó a las partes para que realizaran las alegaciones sobre inclusiones o exclusiones que estimaran pertinentes, resolviéndose en el acto. Asimismo y de conformidad con lo dispuesto en elart. 54 de la LOTJ, previa intrucción a los Jurados en audiencia pública, el día 22 de febrero de 2012 se entregó el objeto del veredicto al Jurado, con el correspondiente cuestionario de preguntas para que sobre las mismas respondiesen en sentido positivo o negativo, al tiempo que se les instruyó en los términos previstos en losarts. 54,59y60 de la LOTJ.

SÉPTIMO.- Las preguntas que se formularon al Jurado, como objeto de veredicto, indicación de su carácter favorable o desfavorable para el acusado Jose Carlos , fueron las siguientes:

¿ DECLARA EL JURADO PROBADOS O NO PROBADOS LOS HECHOS A LOS QUE SE REFIEREN LAS SIGUIENTES PREGUNTAS?

I.- FIJACIÓN DEL HECHO Y DE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE CONCURREN.-

PRIMERA.- (Hecho nuclear de la acusación)

1ª A). Si sobre las 10:30 horas del día 13 de mayo de 2.011, el acusado, Jose Carlos , mayor de edad, nacido el día NUM001 de 1.983, y sin antecedentes penales, en el interior del establecimiento de artículos chinos importados

Shun Xiang, S.L., conocido como "Mas artículos, mejor precio", sito en el edificio Valdés Center de la Avenida de Amsterdam de la localidad de Los Cristianos, Arona, Tenerife, causó la muerte de Africa , a quien no conocía, haciendo uso de un cuchillo tipo jamonero con una hoja de unos 22 centímetros de largo y 1,5 centímetros de ancho, y un mango de 11 centímetros.

Expliquen por qué.

(HECHO DESFAVORABLE PARA EL ACUSADO, POR LO TANTO, PARA QUE SE DECLARE PROBADO SE NECESITAN SIETE VOTOS AFIRMATIVOS, Y CINCO VOTOS PARA QUE SE DECLARE NO PROBADO)

1ª B) En el caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa: Si, para lograr tal propósito, el acusado Jose Carlos había cogido el referido cuchillo de una de las estanterías del citado establecimiento.

Expliquen por qué.

(HECHO DESFAVORABLE PARA EL ACUSADO, POR LO TANTO, PARA QUE SE DECLARE PROBADO SE NECESITAN SIETE VOTOS AFIRMATIVOS, Y CINCO VOTOS PARA QUE SE DECLARE NO PROBADO)

1ª C) En el caso de que las respuestas a las preguntas anteriores sean afirmativas, si el acusado, Jose Carlos , se dirigió portando el referido cuchillo hacia Africa , con la intención de quitarle la vida, y la atacó con el cuchillo, golpeándola por la espalda y en el cuello en repetidas veces hasta conseguir su decapitación total.

Expliquen por qué.

(HECHO DESFAVORABLE PARA EL ACUSADO, POR LO TANTO, PARA QUE SE DECLARE PROBADO SE NECESITAN SIETE VOTOS AFIRMATIVOS, Y CINCO VOTOS PARA QUE SE DECLARE NO PROBADO)

1ª D) En el caso de que las respuestas a las preguntas anteriores sean afirmativas, si Africa se encontraba comprando en el establecimiento referido en el momento de ser atacada por el acusado Jose Carlos .

Expliquen por qué.

(HECHO DESFAVORABLE PARA EL ACUSADO, POR LO TANTO, PARA QUE SE DECLARE PROBADO SE NECESITAN SIETE VOTOS AFIRMATIVOS, Y CINCO VOTOS PARA QUE SE DECLARE NO PROBADO)

1ª E) En el caso de que las respuestas a las preguntas anteriores sean afirmativas, si una vez decapitada Africa , el acusado Jose Carlos , cogió la cabeza separada del cuerpo de Africa , y tras dejar el cuchillo en el establecimiento, salió portando la misma del referido local, siendo detenido en el exterior por personal de seguridad de los establecimientos cercanos y viandantes que colaboraron.

Expliquen por qué.

(HECHO DESFAVORABLE PARA EL ACUSADO, POR LO TANTO, PARA QUE SE DECLARE PROBADO SE NECESITAN SIETE VOTOS AFIRMATIVOS, Y CINCO VOTOS PARA QUE SE DECLARE NO PROBADO)

II.- CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS DE LA RESPONSABILIDAD CRIMINAL.

SEGUNDA.-

2ª.A.-En caso de que la respuesta a la pregunta 1ªA haya sido afirmativa: Si declaran probado que Africa tuvo limitada desde un primer momento, y de modo absoluto, su capacidad de reacción y defensa, e incluso de huida, ante el ataque efectuado por el acusado con el cuchillo, de modo sorpresivo y con golpes repetidos por la espalda y en el cuello, y que tal circunstancia fue aprovechada por el acusado para asegurarse la muerte de la víctima sin riesgo alguno para su integridad física que pudiese provenir de la defensa de Africa **.Expliquen por qué.**

(HECHO MUY DESFAVORABLE PARA EL ACUSADO, PUES LA RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PRIMERA PREGUNTA DE LAS ANTERIORES JUNTO CON ÉSTA PODRÍA DETERMINAR LA CONCURRENCIA DE LA CIRCUNSTANCIA AGRAVANTE DE ALEVOSÍA Y LA CALIFICACIÓN DEL LOS HECHOS COMO DELITO DE ASESINATO, MIENTRAS QUE DE NO MEDIAR TAL RESPUESTA AFIRMATIVA LOS HECHOS PODRÍAN SER CALIFICADOS COMO HOMICIDIO, POR LO TANTO, PARA QUE SE DECLARE PROBADO SE NECESITAN SIETE VOTOS AFIRMATIVOS, Y CINCO VOTOS PARA QUE SE DECLARE NO PROBADO).

2ª.B.-En caso de que las respuestas a la pregunta 1ªA haya sido afirmativa: Si el acusado, Jose Carlos , padece una esquizofrenia paranoide crónica y con persistencia de un núcleo delirante, que al momento de los hechos se encontraba en fase aguda, y produjo en el acusado una anulación de sus facultades intelectivas y volitivas con abolición del juicio de realidad.**Expliquen por qué.**

(HECHO MUY FAVORABLE PARA EL ACUSADO (**pues supondría su absolución**). PRECISA DE CINCO VOTOS AFIRMATIVOS PARA SER DECLARADO PROBADO).

III.-TERCERA.- Contestar a una de las siguientes:

Si el Jurado declara al acusado Jose Carlos AUTOR de la muerte de Africa en los términos expuestos en la cuestión SEGUNDA-A.**Expliquen por qué.**

Si el Jurado declara al acusado Jose Carlos AUTOR de la muerte de Africa en los términos expuestos en la cuestión SEGUNDA-B, (es decir, sin concurrir alevosía determinante del asesinato).**Expliquen por qué.**

(HECHOS DESFAVORABLES PARA EL ACUSADO, POR LO TANTO, PARA QUE SE DECLARE PROBADO SE NECESITAN SIETE VOTOS AFIRMATIVOS, Y CINCO VOTOS PARA QUE SE DECLARE NO PROBADO).

OCTAVO.- En la misma fecha, 22 de febrero de 2013, el Jurado,

tras designar portavoz a D. Benito , alcanzó una decisión definitiva y se procedió por la Magistrada Presidente al examen del acta de la votación, sin que fuera apreciada ninguna causa de devolución. Convocada audiencia pública, a la que asistieron el Ministerio Fiscal y las partes, fue leído el veredicto por el Sr. Portavoz del Jurado conforme consta en acta.

NOVENO.- Seguidamente, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 de la LOTJ se concedió sucesivamente la palabra al Ministerio Fiscal y a la Defensa del acusado a fin de que informaran sobre la medida de seguridad que debía ser impuesta a Jose Carlos , así como sobre el pronunciamiento relativo a la responsabilidad civil, reiterando el Ministerio Fiscal lo manifestado al respecto en su escrito de conclusiones definitivas, y en particular la imposición al acusado, Jose Carlos , de la medida de seguridad de internamiento en establecimiento adecuado al tipo de enfermedad psíquica que padece por tiempo de veinte años, y manifestando la Defensa que se adhería parcialmente a la solicitud del Ministerio Fiscal interesando la imposición al acusado de una medida de internamiento, si bien por tiempo de quince años. Concedido el Derecho a la última palabra al acusado dijo que "él es la segunda reencarnación de Jesucristo y que va a llevar el fuego del Espíritu Santo contra Israel", tras lo cual los autos fueron declarados conclusos para sentencia.

En este juicio se declaran los siguientes:

II.- HECHOS PROBADOS

PRIMERO.- Sobre las 10:30 horas del día 13 de mayo de 2.011, Jose Carlos , mayor de edad, nacido el día NUM020 de 1.983, y sin antecedentes penales, entró en el establecimiento de artículos chinos importados Shun Xiang, S.L., conocido como "Mas artículos, mejor precio", sito en el edificio Valdés Center de la Avenida de Amsterdam de la localidad de Los Cristianos, Arona, Tenerife, para una vez en su interior coger de una de sus estanterías un cuchillo tipo jamonero con una hoja de unos 22 centímetros de largo y 1,5 centímetros de ancho, y un mango de 11 centímetros, tras lo cual se dirigió, con la intención de quitarle la vida, hacia Africa , a quien no conocía y la cual se encontraba comprando en dicho establecimiento, atacándola de modo sorpresivo y sin posibilidad alguna de defensa ni siquiera de huida por parte de ésta, golpeándola con el cuchillo por la espalda en el cuello en repetidas veces hasta conseguir su decapitación total tras causarle la muerte. Acto seguido, y ya fallecida Africa , el acusado, tomó la cabeza separada del cuerpo de Africa , dejando el cuchillo en el establecimiento, y salió portando la misma del referido local, siendo detenido en el exterior por personal de seguridad de los establecimientos cercanos y viandantes que colaboraron.

SEGUNDO.- Jose Carlos , padece una esquizofrenia paranoide crónica y con persistencia de un núcleo delirante, que al momento de los hechos se encontraba en fase aguda, produciéndole una anulación de sus facultades intelectivas y volitivas, con la abolición del juicio de realidad.

III.- FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO .- Al amparo de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley Orgánica 5/95 del Tribunal del Jurado, al haber sido declarado autor de los hechos objeto de acusación el acusado Jose Carlos , y con independencia del juicio de imputabilidad que se realizará más adelante, necesariamente ha de concretarse en la presente Sentencia la existencia de prueba de cargo exigida por la garantía

constitucional de presunción de inocencia. Ello conecta con la facultad concedida al Magistrado Presidente para disolver anticipadamente el Jurado, si, conforme al art. 49 de la LOTJ, concluidos los informes de las partes, no hallare prueba de cargo suficiente respecto de los hechos delictivos o en relación con cualquier imputado, tal como recuerda la STS de 22 de diciembre de 2011.

Dicho mandato legal de motivación cobra aún más sentido si se tiene en cuenta que al Jurado, conforme al art. 61, letra d), de la LOTJ, sólo se le exige que, al redactar el apartado cuarto del acta de la deliberación (el referido a la determinación de los elementos de convicción tenidos en cuenta), efectúe una "sucinta explicación" de las razones por las que han declarado probados o no probados determinados hechos. Razonamiento que debe ser posteriormente objeto de plasmación en la sentencia siguiendo la normativa general para su redacción contenida en la ley (art. 248.3 Ley Orgánica del Poder Judicial).

Los hechos que se han declarado probados en esta resolución son los que fueron sometidos a la decisión del Jurado en el objeto del veredicto que se les entregó para que procedieran a su deliberación y votación. El relato de esos hechos fue prácticamente igual al que las partes alegaron en sus conclusiones definitivas según lo por ellas manifestado una vez practicada la prueba en el acto del juicio; teniendo en cuenta que la Defensa del acusado, formuló con carácter alternativo a la su conclusión definitiva primera, -relativa a la libre absolución del acusado con todos los pronunciamientos favorables-, la calificación de los hechos como constitutivos de un delito de asesinato del art. 138 y 139.1ª del C.P., considerando autor de los hechos al acusado con arreglo al art. 27 y 28 del C.P. y concurriendo en el mismo la circunstancia eximente del art. 20.1 del C.P. El resto de las circunstancias a que alude el escrito de conclusiones definitivas de la Defensa, nada añade ni modifica, desde un punto de vista jurídico penal, a los hechos objeto del presente procedimiento, tal como así se manifestó a las partes al resolver sobre la inclusión o exclusión de cuestiones en el objeto del veredicto.

Por tanto, y partiendo de tal premisa, y tal como se pondrá de manifiesto a continuación, resulta evidente que existía prueba más que suficiente para no acordar la disolución del Jurado respecto a la acusación formulada contra Jose Carlos .

Así se desprende, en primer lugar, a partir del visionado de las grabaciones captadas por las cámaras de seguridad del establecimiento de artículos chinos importados Shun Xiang, S.L., conocido como "Mas artículos, mejor precio", que se ha llevado a cabo en el acto de la vista oral, en las que se observa como un individuo, tras deambular por los pasillos del establecimiento comercial, coge un cuchillo de una de las estanterías de dicho establecimiento, y como cómo una mujer que se encuentra mirando los artículos expuestos en las estanterías, es atacada de repente, de forma sorpresiva y súbita, por la espalda en el cuello por un individuo quien la continúa atacando repetidamente con un cuchillo sin que detenga tal agresión una vez que la víctima ha caído al suelo, arrodillándose dicho sujeto junto a la mujer apreciándose distintos movimientos violentos de éste empleando el cuchillo contra el cuerpo de la mujer que son compatibles con la sección de la cabeza de ésta de su tronco. Observándose, en efecto, cómo transcurridos unos minutos durante los que el individuo se esfuerza en cortar algo, éste se levanta portando una cabeza humana que lleva agarrada por los cabellos.

Por otra parte, el testigo D. Clemente ha

confirmado en el acto del plenario que es conductor de ambulancia y que estaba en el Centro de Salud cuando fue requerida su ayuda para que acudiera al establecimiento comercial y que cuando llegó al lugar de los hechos vio cómo el acusado estaba arrodillado sobre una mujer a la que estaba cortando la cabeza, y que el acusado posteriormente salió del local llevando la cabeza "en la mano derecha" agarrada "por los pelos", así como que redujo al acusado cuando éste se encontraba en la calle junto con un vigilante de seguridad y otras dos personas más.

Confirmando esto último, el también testigo D. Landelino , ha declarado en el acto de la vista oral que el día 13 de mayo de 2011 se encontraba comprando en la ferretería situada junto al establecimiento en cuestión, que oyó gritos y salió y vio a un chico corriendo con una cabeza en la mano, que dicho individuo es la misma persona que el acusado, que aunque observa que actualmente está más gordo y que su aspecto ha cambiado, lo reconoce sin duda. Ha manifestado asimismo, que salió al paso al acusado y que lo golpeó con un casco de moto lo que motivó que pudiera ser reducido con ayuda de otras personas.

Igualmente, D. Jose Ignacio , cuya declaración ha sido practicada en el acto de la vista oral a través de videoconferencia con el Reino Unido, ha manifestado de forma clara y terminante que ese día se encontraba comprando con su esposa en el establecimiento comercial y que la víctima de los hechos estaba muy cerca de ellos, que la misma no intercambió palabra alguna con el acusado, y que vio cómo de pronto el acusado sacaba un cuchillo y le cortaba el cuello a la señora, que le clavaba el cuchillo y se lo volvía a clavar, que desde ese momento vio que ya no había nada que hacer por salvar la vida de la señora y que el agresor estaba tranquilo cuando hacía esto. Su esposa, la también testigo, Dña. María Angeles , también a través de videoconferencia, ha confirmado en el acto de la vista oral lo declarado por su esposo, diciendo que la víctima se encontraba junto a ella y que vio cómo el acusado de pronto la atacó, que lo vio de rodillas sobre la víctima apuñalándola de forma violenta, que pudo ver el cuchillo desde un principio y que no hubo ningún tipo de discusión entre el acusado y la víctima previamente al ataque, añadiendo que el acusado "no parecía humano".

En idéntico sentido, la testigo Dña. Flor , ha manifestado en el acto de la vista oral que trabajaba en el establecimiento donde tuvieron lugar los hechos, que vio parte de lo acontecido, en concreto que vio al acusado entrar al establecimiento al parecer para comprar algo, vio cómo cogió un cuchillo muy grande y que avanzó por el pasillo hacia la señora, que no hubo ninguna discusión, y que observó cómo el acusado le cortó la cabeza a una señora, lo que motivó que la testigo llamara a la dueña del establecimiento para que avisara a la Policía. Afirmó la testigo que el ataque fue por sorpresa y que se puso muy nerviosa ante los hechos presenciados, y que la apariencia del acusado era muy normal, igual que cuando se marchó.

Por otra parte, la testigo Dña. Yolanda , ha declarado en el juicio oral que en el momento de los hechos se encontraba en el establecimiento comercial, en concreto en el pasillo delantero al lado del mostrador, que vio a un individuo dirigiéndose hacia donde ella se encontraba portando un cuchillo en la mano derecha y una cabeza humana en la izquierda, reconociendo los cuchillos que le fueron exhibidos como pieza del convicción como del tipo de los que se venden en su establecimiento, y señalando al que aparece manchado con restos de sangre como el que llevaba el acusado. Afirmó la testigo que vio cómo este individuo dejó el

cuchillo y salió del establecimiento por la puerta que está junto a la Ferretería llevando la cabeza en la mano. Al ser preguntada sobre si reconocía al acusado como el individuo a que se ha referido ha manifestado que no lo puede reconocer porque ha engordado mucho, pero que puede ser él y que escuchó como decía en español, que "he cortado cabeza chica loca", "quitar cabeza" "quita la cabeza", que lo dijo dos veces, que entiende algo de español y que se quedó con la frase "chica loca", que lo de "quitar la cabeza" supo lo que significaba días después, que dichas frases las dijo muy cerca de ella.

El agente de la Policía Nacional Nº NUM002 , instructor del atestado policial, ratificándose en lo actuado, ha manifestado que fue requerido esa misma mañana por una decapitación y que llegó al lugar transcurridos unos veinte minutos después de los hechos. Que posteriormente acudieron la Juez, el Secretario Judicial y el Ministerio Fiscal, y visionaron los vídeos de la cámara de seguridad del establecimiento en sede judicial y se procedió a interrogar a los testigos y comprobaron que no había ninguna relación entre el acusado y la fallecida. Que para garantizar que las grabaciones no pudieran ser alteradas se llevaron las torres de ordenador íntegras al Juzgado donde quedaron custodiadas, y que no se produjo ninguna manipulación ni alteración de los vídeos.

Confirmando lo anterior, el Agente de la Policía Nacional Nº NUM003 , secretario del atestado, ha manifestado que recibieron llamada de que se había producido un asesinato en Valdes Center, que vio el cuerpo de la fallecida decapitado, que procedieron al visionado de las cintas de vídeo de la cámara de seguridad y que tras asegurar la zona, se llevaron la CPU entera para evitar manipulaciones, que el equipo estuvo custodiado todo el tiempo, y que asimismo se llevaron al acusado a Comisaría para asegurar su integridad.

Por su parte, el agente de la Policía Nacional Nº NUM004 , ha declarado que acudió al lugar de los hechos ante el aviso de un supuesto apuñalamiento, que la gente le indicaba que el acusado estaba en la otra acera y que vio cómo había un vigilante reduciendo al acusado y le ayudaron llevando a continuación al detenido a comisaría. Añadió que el acusado estaba completamente ensangrentado y que estaba alterado, y que mientras era conducido a comisaría en el vehículo policial iba repitiendo palabras en su idioma, que no tenía un comportamiento normal, que parecía que estaba fuera de sí.

El agente de la Policía Nacional Nº NUM005 asimismo ha manifestado que estaba de servicio el día de los hechos, que fueron comisionados por la sala por apuñalamiento en un establecimiento chino, que llegó en el segundo vehículo, entró en la tienda y custodió el cuerpo hasta que llegó la Policía Científica.

El agente de la Policía Nacional Nº NUM006 ha manifestado que llegó al mismo tiempo que los otros agentes. Que vio a los compañeros corriendo hacia la otra acera, y que estaban reduciendo al acusado junto a un vigilante de seguridad. Que en el acera de enfrente había una cabeza con un reguero de sangre grande, que siguió el reguero de la sangre hasta la tienda y allí encontró el cuchillo y encontró en la tienda a una persona sin la cabeza.

Respecto a los peritos que han depuesto en sala,

los facultativos con nº CIP NUM007 , NUM008 , NUM009 y NUM010 se han ratificado en el informe que obra en autos y han afirmado que las muestras analizadas se corresponden con el marcador del perfil genético de ADN del acusado.

Los peritos de la Policía Científica de Madrid, Agentes Nº NUM011 y NUM012 , afirmándose y ratificándose en su informe, han manifestado en el acto de la vista que analizaron el análisis de muestras de ADN de la víctima y del acusado. Que en el lugar de los hechos se encontraron las muestras en un cuchillo y en la mesa donde se encontró, así como en un trozo de papel, en las chanclas y en la mano derecha y en el pie del detenido; y también en el pantalón del detenido, en su camiseta y la del vigilante de seguridad. Que tales muestras se tomaron en el lugar de los hechos. Concluyendo que no tienen duda sobre los resultados de las muestras.

En idéntico sentido, los peritos, Dr. Edmundo y Dr. Carmelo , ratificándose en su informe pericial toxicológico, han manifestado que analizaron las uñas de la víctima y que obtuvieron perfiles de ADN masculino, que en concreto en la 15-3 se obtuvo un perfil único claro y que coincidía con el perfil indubitado del acusado.

Asimismo, los Forenses, D. Pelayo , y D. Pedro Jesús , que realizaron la autopsia del cadáver, afirmándose y ratificándose en su informe, han indicado que la causa principal de la muerte es la sección de los vasos sanguíneos y que la decapitación fue posterior. Que a nivel de cuello el cadáver presentaba numeros heridas efectuadas con instrumento cortante, con sección de vasos sanguíneos, venas y arterias, a nivel del cuello. Que el cadáver de la víctima presentaba heridas en cuero cabelludo efectuadas con instrumento cortante. Que presentaba cortes en ambas manos en la cara interna, se trataba de heridas defensivas, causadas con arma blanca, en concreto, un cuchillo. Que además el cadáver presentaba marcas en los brazos, en el derecho concretamente, compatibles con sujeción por el acusado que se manifiestan como hematomas, y que conforme a las lesiones apreciadas lo más probable es que el agresor estuviera por detrás de la víctima, que ello lo evidencia el hecho de que había muchos cortes a nivel de mentón, aunque ello no significa que el agresor no pudiera haber cambiado de posición respecto a la víctima posteriormente. Que el deguello es sólo el corte del cuello sin separación de la cabeza, que se realizó en segundos, y que la fase de decapitación conlleva un cierto tiempo que es muy laborioso y requiere mucha fuerza, ya que es difícil seccionar los huesos pero no imposible si se dispone de suficiente fuerza. Que tomaron muestras de las uñas de la víctima que se mandaron a analizar. Que observaron el cuchillo que figura como pieza de convicción y que lo consideran apto para producir la decapitación. Que en la región del cuello hay numerosas heridas. Que la médula se rompió por fractura, no por sección, de lo que deducen que la intención del acusado era seccionar la cabeza, manteniéndola en una mano y con la otra seccionarla. Que la muerte puede que se haya producido con pocos cortes, pero que la separación del cráneo era la finalidad pretendida por el agresor tal como lo ponen de manifiesto los numerosos cortes.

En cuanto a los Agentes de la Policía que realizaron la diligencia de inspección ocular del lugar de los hechos, en concreto los Agentes del CNP con Nº NUM013 y NUM014 , respectivamente, que han declarado en el plenario, ratificándose en su informe, manifestaron en el acto de la vista que se trataba de un establecimiento bastante grande, que se tomaron muestras del acusado y que las

enviaron para su análisis destacando que el día de los hechos el acusado estaba mucho más delgado que en la fecha de la vista oral.

Por otra parte, los peritos médicos forenses que han emitido la Pericial Médica Psiquiátrica obrante en autos, se han ratificado en el acto de la vista oral en su informe, manifestando que se entrevistaron dos veces con el acusado y tuvieron en cuenta la documentación de su historial, y que en las entrevistas les dio muchos datos de donde había vivido y que también les refirió consumo de drogas. Que en el año 2010 estuvo ingresado en un centro psiquiátrico en el Reino Unido. Manifestaron que el acusado padece una esquizofrenia paranoide, con pensamientos que son patológicos y delirantes, que también tiene un trastorno de la percepción, que oía voces dentro de su cabeza, que le obligaban a realizar actos y que no tiene la capacidad de evitarlos, que no puede resistirse a las voces porque son imperiosas y le resulta imposible resistirse. Que cuando se produjeron los hechos estaba en una fase aguda, que tenía una ruptura con la realidad, que estaba psicótico. Que el pensamiento de la persona estaba distorsionado y por eso fue ingresado después de los hechos en el psiquiátrico. Que se trata de una enfermedad endógena y que no hay relación de causalidad con ningún elemento externo. Que precisa tratamiento de tipo psico-farmacológico de por vida. Que los síntomas mejoran con el tratamiento pero que ha de asegurarse que el paciente tome la medicación de por vida porque si no aparecen brotes psicóticos, y que el acusado precisa necesariamente ser internado en psiquiatría, dada la entidad de la patología, la nula capacidad de reconocimiento de la enfermedad y su historial. Han añadido que el acusado en las entrevistas les reconocía los hechos y explicaba porque los había hecho y quién se lo había mandado, que la esquizofrenia no implica problemas de memoria, por lo que puede recordar los hechos, que de hecho a ellos se los narró cuando lo diagnosticaron. Que en el brote agudo el paciente no miente porque está convencido de que en ese momento hace lo correcto, y que al cabo de los meses les narró lo que había hecho cómo lo había hecho y por qué. Que en el momento de los hechos su capacidad volitiva y cognitiva estaban abolidas, y que indudablemente el consumo de alcohol o sustancias tóxicas incide en la intensidad y mayor frecuencia de la sintomatología de la enfermedad.

Justificada así, en base a la existencia de prueba de cargo suficiente, la continuación del Juicio oral, por su parte, el Tribunal del Jurado no tuvo dudas a la hora de considerar probados cada uno de los párrafos en los que se describían los hechos que han sido recogidos en el apartado de Hechos Probados de la presente resolución, ya que declararon probados por unanimidad, los hechos referidos en las cuestiones 1ªA, 1ªB, 1ªC, 1ªD, 1ª E, 2ªA, 2ªB y 3ªa). No obstante, resulta necesario concretar la prueba en la que se ha basado el Jurado para declarar o no probados los hechos, teniendo en cuenta que, según las instrucciones dadas a sus miembros, únicamente tienen carácter de prueba y pueden valorarse como tales, aquéllas que se hayan realizado en su presencia en las distintas sesiones del juicio. También se les indicó que en el acta de votación hicieran una sucinta explicación de las razones por las que rechazaban o aceptaban los hechos sometidos al veredicto y así lo han hecho.

Es muy importante individualizar la prueba tenida en cuenta para declarar o no probado cada apartado de los hechos, al objeto de que pueda determinarse si el medio probatorio es idóneo para ello. En este caso, los elementos de convicción que el Jurado ha considerado para la declaración de los hechos probados son los que se reflejan en el acta y que se relacionan para cada uno de los apartados, según se transcribe seguidamente. Tal como consta en el apartado

TERCERO del correspondiente Acta, los Jurados han atendido como elementos de convicción "con relación a la 1ª A, declaramos probados los hechos descritos por el visionado del video, así como por las declaraciones de los testigos que depusieron en el acto del juicio a través de videoconferencia en Inglaterra y manifestaron que se encontraban en el lugar de los hechos y presenciaron cómo se produjo. Asimismo por la declaración del testigo NUM015 , que era el conductor de la ambulancia y dijo que lo había visto desde el fondo del pasillo". "Con respecto a la 1ª B, lo declaran probado por haberse visto en el vídeo cómo coge el cuchillo de una de las estanterías y también ,la testigo nº NUM016 ,que era la dependienta china del establecimiento lo corroboró". "Con relación a la 1ª C, la declaran probado por el visionado del vídeo y por el testimonio de los testigos NUM017 y NUM018 que relataron los hechos en el acto de la vista". "Con relación al 1ºD, por los mismos razonamiento expuestos en la pregunta anterior". "Con relacion a la 1ª E, lo declaramos probado por el visionado del vídeo donde aparece el acusado portando la cabeza en la mano y por las declaraciones de los testigos nº NUM015 , NUM019 y NUM016 que lo vieron saliendo y posteriormente en el exterior del mismo". "Con relación a la 2ª A declaran probado que Africa no se pudo defender porque tuvo anulada la capacidad de reacción, dado el carácter sorpresivo del ataque, que se visionó en el vídeo". "Con relación a la 2ª B, declaran probado que el acusado sufre una enfermedad psiquiátrica, por la declaración de los médicos psiquiatras del Centro de Sevilla y por el informe que obra en los autos y que ratificaron en su momento y que establecía que sufría una esquizofrenia paranoide crónica con persistencia de un nucleo delirante". "Por lo anterior los Jurados, por UNANIMIDAD, encontramos al acusado Jose Carlos autor de la muerte de Africa en los términos expuestos en la cuestión SEGUNDA A",- es decir considerando probado por unanimidad la cuestión 3ª a)-.

Todos los elementos probatorios tenidos en cuenta por el Jurado son pruebas válidas y suficientes para considerar demostrados los hechos en los que se basa el veredicto considerando la autoría del acusado en relación a los hechos por los que ha venido siendo acusado, cuya presunción de inocencia ha quedado desvirtuada por verdaderas pruebas de cargo, practicadas en un juicio justo, que se ha celebrado con todas las garantías y exigencias legales. Siendo, por otra parte, también válidos y suficientes los elementos probatorios tenidos en cuenta por el Jurado, en relación a la apreciación en el acusado de la eximente completa de responsabilidad criminal prevista en el art. 20.1 del C.P. que también ha sido sometida a su consideración y aprobada por unanimidad.

SEGUNDO.- Los hechos que han sido declarados probados son constitutivos del delito de asesinato por el que viene acusado D. Jose Carlos . Por las pruebas existentes, es evidente que los hechos han de incardinarse en el tipo penal del delito de asesinato sancionado en el art. 138y139.1ª del Código Penal, que dicen respectivamente lo siguiente: "El que matare a otro será castigado, como reo de homicidio, con la pena de prisión de diez a quince años"; "Será castigado con la pena de prisión de quince a veinte años, como reo del delito de asesinato, el que matare a otro concurriendo alguna de las circunstancias siguientes: 1ª. Con alevosía"

Frecuentemente el ánimo homicida ha de inferirse de datos objetivos externos. Como señala laSTS 12-06-2008, la determinación de la concurrencia del elemento subjetivo que requiere el tipo penal, se obtiene mediante un juicio de inferencia que surge del análisis racional y lógico de los datos objetivos que se describen en el hecho probado, y así viene atendiéndose a la idoneidad del arma utilizada, a la parte del cuerpo afectada y al esfuerzo usado, así como a circunstancias

preexistentes y posteriores al hecho mismo. En el presente caso, dicho ánimo homicida existe sin duda y no es preciso hacer ningún juicio de inferencia.

Por lo que respecta a la circunstancia agravante de alevosía, tal como recuerda laSTS nº 1201/2009 de 30 de noviembre, la agravante de alevosía supone, como presupuesto, un componente normativo, constituido por la naturaleza de delito estimado como correspondiente a la clase de los delitos contra las personas; y como requisitos, uno objetivo constituido por el procedimiento, modo o forma de la agresión que debe ser funcional para la eliminación de riesgos en el agresor proveniente de la acción defensiva de la víctima y, como subjetivo, que ese procedimiento modo o forma de la agresión sea dirigido tendencialmente a lograr precisamente ese fin. El veredicto formulado por el Jurado, al entender probadas por unanimidad la cuestión 1ª A y 2ª A, determina que el comportamiento realizado por el acusado deba ser reputado como alevoso. Conforme a la Sentencia del Tribunal Supremo de 26 noviembre de 2007: " una de las modalidades de ataque alevoso es el realizado por sorpresa, de modo súbito e inopinado, imprevisto, fulgurante y repentino, (véase laSTS 382/2001, de 13 de marzo y las que se citan en ella). En estos casos es precisamente el carácter sorpresivo de la agresión lo que suprime la posibilidad de defensa, pues quien no espera el ataque difícilmente puede prepararse contra él, al menos en la medida de lo posible. Esta modalidad de la alevosía, súbita e inopinada, al haber desencadenado el agente el ataque de improviso, estando totalmente desprevenida la víctima, por lo tanto, es apreciable en el presente supuesto.

Por otra parte, tal como se ha anticipado, concurren los requisitos de tal tipo penal, a saber: relación de causalidad entre la acción del acusado y la muerte de Africa , el ánimo o dolo directo de matar dado que no sólo resulta la idoneidad del arma utilizada para causar la muerte sino asimismo del modo en que fue empleada la misma contra la víctima, alto número de golpes y cuchilladas y zona (cuello y por la espalda de la víctima), suficientes y determinantes de la muerte de la víctima por necesidad, pues el Jurado ha apreciado la concurrencia de la agravante de alevosía, suficiente para tal calificación delictiva. La concurrencia de tal circunstancia agravante resulta manifiesta del propio relato fáctico que evidencia que el acusado actuó prevaleciendo del ataque absolutamente sorpresivo e inesperado para la víctima, la cual de modo evidente estuvo impedida de oponer defensa alguna eficaz contra el acusado así como de cualquier posibilidad de evitar la agresión, asegurándose con ello el acusado que no concurría riesgo alguno para su persona que pudiera provenir de la acción defensiva de la víctima. Es decir, se aprecia que concurre la circunstancia de la alevosía dado el ataque del todo sorpresivo de que fue objeto Africa , quien tuvo limitada desde un primer momento toda capacidad de posible defensa eficaz frente al contundente e inopinado ataque de que fue objeto, así como incluso cualquier posibilidad de huida. Las circunstancias del ataque, tanto por su carácter totalmente inesperado para la víctima, sino además por el medio empleado en su comisión, -un cuchillo de considerables dimensiones-, y la forma en que tuvo lugar el mismo, con golpes repetidos por la espalda y en el cuello, fueron aprovechadas por el acusado para asegurarse la muerte de la víctima sin riesgo alguno para su integridad física que pudiera provenir de la defensa de ésta.

En tal sentido, tal como han manifestado los Médicos Forenses D. Pedro Jesús y D. Pelayo en el acto de la vista oral al ratificarse en sus Informes Médicos de Autopsia y resulta de las conclusiones del Informe Preliminar

de Autopsia de 14 de mayo de 2011, ratificado por el Informe Definitivo de 24 de agosto de 2011, y que señalan como causa inmediata de la muerte como un "shock hemorrágico hipovolémico" y la causa fundamental de la muerte el "degüello con posterior decapitación". Así han asegurado que "es enteramente compatible y probable que el agresor estuviera situado por detrás de la víctima, produciéndole uno o varios cortes en el cuello seccionando los grandes vasos y las vías respiratorias", "las lesiones observadas son enteramente compatibles con haberse producido con un instrumento con un filo de corte, que produjo la sección de venas y arterias a nivel de cuello, así como de la laringe, justo por encima de la glotis". "Esto produjo la extensa hemorragia externa que fue la responsable del fallecimiento". Han añadido los forenses referidos, en relación a la violencia de los golpes, que "viene determinada por la profundidad de las heridas, y sobre todo, por las lesiones de los tejidos duros. Con respecto a este caso, encontramos un degüello en el que posteriormente termina en decapitación, para lo que es necesaria la aplicación de fuerza para poder llegar a seccionar la columna vertebral, siendo visibles en la cara anterior del cuerpo de la quinta vértebra varias líneas de corte". Por otra parte, según han señalado tales facultativos "las heridas de arma blanca lesionaron zonas donde hay órganos vitales en el cuerpo como las vías aéreas, vasos del cuello y médula espinal", "se produjeron heridas muy importantes de degüello con sección en varios tiempos de grandes vasos del cuello, de las vías respiratorias, de la médula espinal, llegando a la decapitación", y "la agresión con un arma blanca de considerables dimensiones, coloca a la víctima en inferioridad de condiciones".

Todas estas circunstancias fácticas han sido sometidas a la consideración del Jurado en el objeto del veredicto, quienes han declarado probada por unanimidad la proposición correspondiente.

Así, los miembros del Jurado de forma unánime respondieron positivamente a la pregunta 1ª A, es decir, "Si sobre las 10:30 horas del día 13 de mayo de 2011, el acusado, Jose Carlos, mayor de edad, nacido el día NUM020 de 1983, y sin antecedentes penales, en el interior del establecimiento de artículos chinos importados Shun Xiang, S.L., conocido como "Mas artículos, mejor precio", sito en el edificio Valdés Center de la Avenida de Amsterdam de la localidad de Los Cristianos, Arona, Tenerife, causó la muerte de Africa, a quien no conocía, haciendo uso de un cuchillo tipo jamonero con una hoja de unos 22 centímetros de largo y 1,5 centímetros de ancho, y un mango de 11 centímetros", -sin perjuicio de que también lo hicieron respecto de las cuestiones 1ª B, C, D, y E-), y a la pregunta 2ª A, es decir, "En caso de que la respuesta a la pregunta 1ª A haya sido afirmativa: Si declaran probado que Africa tuvo limitada desde un primer momento, y de modo absoluto, su capacidad de reacción y defensa, e incluso de huida, ante el ataque efectuado por el acusado con el cuchillo, de modo sorpresivo y con golpes repetidos por la espalda y en el cuello, y que tal circunstancia fue aprovechada por el acusado para asegurarse la muerte de la víctima sin riesgo alguno para su integridad física que pudiese provenir de la defensa de Africa".

Por tanto, y situado en tales términos el debate, el Jurado declaró probados por unanimidad los hechos que anteceden en el relato fáctico, los cuales son legalmente constitutivos de un delito de asesinato previsto y penado en el artículo 138 y 139.1ª del C.P. al cometerse con alevosía, al concurrir todos y cada uno de los elementos del tipo, y sin perjuicio de lo que más adelante se referirá en relación a la imputabilidad del agente.

TERCERO .- Es autor del delito de asesinato con alevosía referido, D. Jose Carlos , por aplicación de los arts. 27y28 del C.P., tal como resulta del veredicto del Jurado que por unanimidad ha considerado probada la cuestión 3ª a), "Si el Jurado declara al acusado Jose Carlos AUTOR de la muerte de Africa en los términos expuestos en la cuestión SEGUNDA-A.", es decir, habiendo declarado probado que el acusado es autor de la muerte de Doña. Africa mediando la circunstancia de alevosía. El Jurado ha justificado tal decisión, tras declarar acreditado por unanimidad que el acusado causó la muerte a la víctima en la forma y modo en que resulta recogido en el apartado de hechos probados, y considerándolo acreditado "por el visionado del vídeo, así como por las declaraciones de los testigos que despusieron en el acto del juicio a través de videoconferencia en Inglaterra y manifestaron que se encontraban en el lugar de los hechos y presenciaron cómo se produjo. Asimismo por la declaración del testigo NUM015 , que era el conductor de la ambulancia" y entendiendo acreditado por unanimidad que la víctima "no se pudo defender porque tuvo anulada la capacidad de reacción, dado el carácter sorpresivo del ataque, que se visionó en el vídeo".

En el caso de autos, es evidente que nos encontramos ante un supuesto de delito flagrante, no sólo por la grabación del suceso por las cámaras de seguridad, sino por la comisión del delito en presencia de numerosos testigos presenciales, y la intervención inmediata de diversas personas que se encontraban en el exterior del local donde sucedieron los hechos que detuvieron al acusado portando la cabeza separada del cuerpo del tronco de la víctima, Africa . Testigos que en tal sentido han declarado en el acto de la vista oral conforme ha quedado expuesto en el Fundamento Jurídico Primero de la presente resolución y consta en las correspondientes actas de las sesiones del Juicio oral. Todo ello, sin perjuicio del resto de material probatorio que obra en autos y que asimismo elimina la presunción de inocencia tal y como resulta de SSTS como la de 27 de mayo de 2013 de septiembre de 1988.

En este último sentido, consta acreditado que el ADN del acusado que se corresponde con el encontrado en la víctima y en el cuchillo. Así lo han afirmado en el acto de la vista oral los peritos que han emitido el informe de 14 de junio y de 28 de mayo de 2012 del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, D. Edmundo y D. Juan Alberto que analizaron los restos biológicos encontrados en las uñas de la fallecida correspondiéndose los hallados en una de tales uñas (la muestra 15-3) con el perfil genético obtenido de la muestra indubitada de Jose Carlos . Todo ello en correspondencia con el contenido del Informe del Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife de 7 de mayo de 2012, Servicio de Patología Forense y el informe de 2 de diciembre de 2012 de la Unidad Central de Análisis Científicos, Laboratorio de Biología-ADN, de la Dirección General de Policía, figurando todos estos informes en autos y habiendo sido ratificados por los peritos que los emitieron en el acto de la vista oral, sin haberse planteado impugnación alguna por parte de la Defensa.

Además tampoco cabe duda de que la persona del detenido es la misma persona que aparece en el vídeo obtenido por la cámara de seguridad instalada en el establecimiento en que ocurrieron los hechos, así se desprende de las testificales de los Agentes del Cuerpo Nacional de Policía Nº NUM002 y Nº NUM003 , que tras el visionado de las cintas de vídeo procedieron al aseguramiento y conservación de los terminales de CPU para garantizar que no se produjera ninguna manipulación; así como de la testifical del Agente del Cuerpo Nacional de Policía con Nº NUM004 , que participó en la detención del acusado y lo

condujo a comisaría en los momentos inmediatamente posteriores a los hechos, y del Agente de la Policía Nacional con Nº NUM006 que vio al acusado cuando estaba siendo reducido en el exterior del establecimiento donde ocurrieron los hechos.

Asimismo resulta tal identificación plena de la persona del acusado como el autor de los hechos a partir de las declaraciones en el acto de la vista oral de D. Clemente y D. Landelino , quienes no han manifestado duda alguna a la hora de reconocer al acusado como el autor de los hechos. Todo ello, junto a la evidencia proporcionada por las circunstancias de flagrancia comisiva que han sido manifestadas anteriormente, sin que en ningún momento haya sido cuestionada tal identidad por parte de la Defensa del acusado, que, por otra parte, es la misma que lo asistió tras su detención.

CUARTO .- Concorre en el acusado la circunstancia eximente de la responsabilidad criminal del art. 20.1º del C.P. El Ministerio Fiscal en el acto del Juicio Oral y en el trámite de conclusiones, ha mantenido en todo momento que concurre tal circunstancia eximente en el acusado, por lo que, en aplicación del principio acusatorio, dicha circunstancia debe apreciarse en la Sentencia en aplicación del principio acusatorio y el de congruencia de la resolución judicial, y motiva necesariamente el dictado de un pronunciamiento absolutorio en relación a la responsabilidad penal dimanante de los hechos.

En tal sentido, tanto la esquizofrenia como la paranoia han sido consideradas circunstancias eximentes por la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, en Sentencias como las de 8 de junio de 1990, 28 de septiembre de 1990, la 733/97 de 22 de mayo, y 97/2004 de 27 de enero, y 590/95 de 24 de abril.

Tal como ha quedado apuntado, el diagnóstico de esquizofrenia paranoide crónica y con persistencia en el acusado de un núcleo delirante fue confirmado de forma contundente en el acto del Juicio Oral por los facultativos forenses D. Jesús , Jefe del Servicio de Psiquiatría Forense y D. Luis Antonio , Médico especialista en Medicina Legal y Forense, ambos Médicos Forenses del Instituto de Medicina Legal de Sevilla, quienes se ratificaron en el Informe Médico Forense de fecha 12 de diciembre de 2011 que obra en autos con el resultado que consta probado. Ambos facultativos han concluido y así lo han manifestado en el acto de la vista, tras practicar el estudio del acusado, que el mismo padece una alteración mental llamada Esquizofrenia Paranoide (F20.0 CIE10), y que al momento de los hechos se encontraba en fase aguda, así como que dicho cuadro produce una anulación de sus facultades intelectivas y volitivas con la práctica abolición del juicio de realidad.

La esquizofrenia, según doctrina jurisprudencial consolidada, "constituye una grave enfermedad psíquica de carácter permanente que, a efectos de responsabilidad penal tiene siempre notoria influencia en la personalidad del sujeto activo de la acción, permanentemente afectado en sus capacidades intelectivas y volitivas. Como explica la STS núm. 143/2009, de 17 de febrero, esta enfermedad engloba un conjunto de padecimientos mentales, generalmente graves, que cursan con una variada serie de síntomas y que, en función de su presencia, prevalencia e intensidad, dan lugar a distintos tipos o denominaciones. Según el DSM-IV-TR, para su diagnóstico pueden utilizarse distintos criterios que atienden a diferentes síntomas de la enfermedad. Son especialmente relevantes algunos síntomas positivos, que incluyen

distorsiones del pensamiento inferencial (ideas delirantes), de la percepción (alucinaciones), del lenguaje y la comunicación (lenguaje desorganizado) y de la organización del comportamiento (comportamiento gravemente desorganizado o catatónico). También pueden concurrir síntomas negativos referidos a restricciones del ámbito y la intensidad de la expresión emocional (aplanamiento afectivo), de la fluidez y la productividad del pensamiento y del lenguaje (alogia), o bien del inicio del comportamiento dirigido a un objetivo (abulia). La enfermedad cursa de forma muy variable según cada caso, con exacerbaciones y remisiones en algunos sujetos, mientras que otros permanecen crónicamente enfermos. Según el referido manual, la remisión completa no es habitual, y de los que siguen presentando la enfermedad algunos parecen tener un curso relativamente estable, mientras que otros empeoran progresivamente". "En suma nos encontramos ante una patología mental que condiciona la personalidad y comportamientos de la persona que lo padece (STS núm. 1142/2010, de 21 de diciembre). A partir de este diagnóstico se pueden poner en marcha tratamientos con fármacos neurolépticos que pueden contener, aunque no siempre, los brotes agudos de alucinaciones y delirios agresivos" (STS 1954/12, de 1 de febrero de 2012).

Por todo lo expuesto, en la ejecución del referido delito concurre la causa eximente de la responsabilidad del art. 20.1 del C.P., conforme al cual "está exento de responsabilidad criminal el que al tiempo de cometer la infracción penal, a causa de cualquier anomalía o alteración psíquica, no pueda comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión". Así lo ha considerado el Jurado por unanimidad al responder en sentido afirmativo a la pregunta 2ª B del objeto del veredicto sometido a su consideración.

El artículo 101 de la LECRIM. dispone que "1. Al sujeto que sea declarado exento de responsabilidad criminal conforme al número 1 del artículo 20, se le podrá aplicar, si fuere necesaria, la medida de internamiento para tratamiento médico o educación especial en un establecimiento adecuado al tipo de anomalía o alteración psíquica que se aprecie, o cualquier otra de las medidas previstas en el apartado 3 del artículo 96. El internamiento no podrá exceder del tiempo que habría durado la pena privativa de libertad, si hubiera sido declarado responsable el sujeto, y a tal efecto el Juez o Tribunal fijará en la sentencia ese límite máximo. 2. El sometido a esta medida no podrá abandonar el establecimiento sin autorización del Juez o Tribunal sentenciador, de conformidad con lo previsto en el artículo 97 de este Código".

Por otro lado, el art. 96.2.1 del C.P. establece como medida de seguridad el internamiento en centro psiquiátrico, considerada como medida privativa de libertad. La necesidad de la adopción de la medida de aseguramiento referida ha sido informada de forma unánime por los peritos, tal como se ha expuesto, teniendo en cuenta la magnitud del hecho acaecido, las circunstancias psiquiátricas de su autor, la peligrosidad derivada de las mismas y la pena que le hubiera correspondido como autor de un delito de asesinato del art. 138 y 139.1º del C.P. no hubiera mediado la concurrencia de la circunstancia eximente de la responsabilidad criminal, siendo la pena asignada a tal delito la de prisión de quince a veinte años.

La medida alternativa a la pena deberá basarse en el pronóstico de peligrosidad criminal y el lugar de su cumplimiento debe ser el centro psiquiátrico previsto en la ley acorde con la naturaleza de la dolencia del autor de los

hechos. Dadas las recomendaciones efectuadas por los médicos psiquiatras forenses tanto en su informe como en el acto de la vista oral, y la necesidad evidente constatada a partir del ingreso del acusado como preso preventivo en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla, resulta indispensable que la medida de internamiento psiquiátrico de Jose Carlos se lleve a cabo en un Centro o Establecimiento Psiquiátrico Penitenciario de régimen cerrado, lugar que se ha revelado como el más idóneo para su tratamiento. En efecto, los Médicos Forenses, Drs. Jesús y Luis Antonio , han afirmado tanto en su Informe de 12 de diciembre de 2011, como en el acto del plenario, con idéntica contundencia a la relativa a la apreciación de la circunstancia eximente del art. 20.1 del C.P. en el acusado, que "dicho trastorno, dada la cronicidad del mismo, con persistencia de un núcleo delirante, el nulo apoyo social, requiere tratamiento como el que se está realizando actualmente, considerando que ha de llevarse a cabo en régimen de internamiento donde se garantice la administración del mismo". El acusado fue ingresado desde el 27 de junio de 2011 en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla, en calidad de preso preventivo, donde continuaba a la fecha de la elaboración del citado Informe de 12 de diciembre de 2011. Por tanto, ante las claras indicaciones efectuadas por Médicos Forenses que han examinado al acusado al informar sobre su imputabilidad, y dada la peligrosidad potencial que presenta, plasmada en el hecho homicida alevoso, en la forma en que el mismo fue ejecutado y la razonable posibilidad de reiteración delictiva ante circunstancias análogas; precisando el acusado para el control de tal padecimiento de tratamiento psico-farmacológico continuo y de por vida según han declarado los citados facultativos en el acto de la vista, y debiendo asegurarse la continuidad de dicho tratamiento y su efectividad, - ya que, tal como han referido tales forenses en el juicio oral, en caso de interrupción de dicho tratamiento no cabe sino esperar la reaparición de la sintomatología con brotes psicóticos ya constatada-, resulta imprescindible la adopción de la medida de internamiento del acusado Jose Carlos en un Centro o Establecimiento Psiquiátrico Penitenciario de régimen cerrado en todo caso.

A fin de graduar la duración del internamiento se debe ponderar la escala fijada por el legislador en sus plazos mínimos y máximos, para adecuarla al caso concreto y a la vista de la peligrosidad resultante en la persona del acusado. Por otra parte, la duración de la medida alternativa tiene en cuenta el estado de inimputabilidad plena, del que sin duda se deduce una mayor peligrosidad que la resultante de los estados intermedios de semiimputabilidad.

Cabe citar aquí el art. 1.2 del Código Penal, a cuyo tenor "las medidas de seguridad sólo podrán aplicarse cuando concurren los presupuestos establecidos previamente por la Ley", añadiendo el art. 3.2 del mismo Texto que establece que "tampoco podrá ejecutarse pena ni medida de seguridad en otra forma que la prescrita por la Ley y reglamentos que la desarrollan, ni con otras circunstancias o accidentes que los expresados en su texto". Por su parte, el art. 6 del C.P. especifica que el fundamento de la adopción de las medidas de seguridad radica en "la peligrosidad criminal del sujeto al que se impongan, exteriorizada en la comisión de un hecho previsto como delito", y que no pueden resultar "ni más gravosas ni de mayor duración que la pena abstractamente aplicable al hecho cometido, ni exceder el límite de lo necesario para prevenir la peligrosidad del autor".

Por ello las medidas de seguridad cumplen una doble finalidad, por un lado la tendente a la protección de las víctimas, y por otro, la

rehabilitación y reinserción social del delincuente. En tal sentido, la Jurisprudencia reiterada del TS, de la que son exponentes laSTS 124/2012, de 6 de marzo, así como laSTS 345/2007, de 24 de abril, destaca que la medida de seguridad se individualiza según la peligrosidad del sujeto, de modo que mientras que las penas se imponen a los imputables, las medidas se imponen a los peligrosos, cualquiera que sea su grado. De igual manera, laSTC 24/1993justifica la conexión de la medida de seguridad relativa al enajenado mental con la peligrosidad social y la evolución de su enfermedad, pronosis que se fundamenta en la peligrosidad criminal puesta de manifiesto en el hecho delictivo cometido, es decir, en la potencialidad del sujeto exteriorizada en actos concretos y acreditados que han evidenciado su idoneidad para cometer "acciones antisociales" o dañosas. En tal sentido, elart. 95.1.2ª del C.Pestablece como presupuesto para la imposición de una medida de seguridad "que del hecho y de las circunstancias personales del sujeto pueda deducirse un pronóstico de comportamiento futuro que revele la probabilidad de comisión de nuevos delitos". Tal como señala laSTS 345/2007"la medida de seguridad no se impone -sin más- como un remedio terapéutico para el enfermo mental, inimputable mentalmente, sino en función de la peligrosidad social del sujeto, y del pronóstico de reincidir en su comisión criminal".

Por otra parte, y junto al fundamento de la peligrosidad, en la adopción de la medida de seguridad subyace un fin terapéutico respecto del sujeto declarado inimputable, siendo éste "el objetivo último de este instrumento legal vinculado a la pena en su función de reinserción social, por mandato delart. 25 de la Constitución", como recuerda laSTS 1954/2012 de 1 de febrero de 2012y laSTS 464/2002, de 14 de marzo.

Tal como ya afirmara laSTS núm. 345/2007, de 24 de abrilcon cita de laSTS núm. 1176/2003, de 12 de septiembre, "A diferencia de lo que ocurre en otras legislaciones, y también en España antes del C.P 1995, ahora bajo la vigencia de este último Código, hay que fijar en la sentencia (absolutoria respecto de la pena) el límite máximo de la medida de seguridad, particularmente cuando consiste en privación de libertad". Por otra parte, tal como señala laSTS 1954/12 de 1 de febrero, de conformidad con lo dispuesto en losarts. 101.1y6.2 del C.Pque ya han sido citados, y "conforme lo interpreta la Circular de la Fiscalía General del Estado al responder a la consulta nº 5/1997, de 24 de febrero", según la cual "esta referencia a "la pena abstractamente aplicable al hecho cometido" como literalmente se dice en elart. 6.2 del C.Pha de referirse a la prevista en el correspondiente artículo definidor del delito teniendo en cuenta lo dispuesto en los arts. 61 a 64 a propósito del grado de ejecución (consumación y tentativa) y de participación (autoría y complicidad) y sin consideración a las circunstancias agravantes de carácter genérico (arts. 21, 22 y 23)".

Por tanto, y siguiendo a la citadaSTS, 1954/12 de 1 de febrero, sin perjuicio de que dada la inimputabilidad del acusado, haya de declararse necesariamente su absolución por tal circunstancia, y por tanto no proceda la imposición de pena alguna, es el límite de dicha pena considerada en abstracto la que determina el límite máximo de duración de la medida de seguridad que se le ha de imponer como alternativa a la pena. Es decir, establecida la pena para el delito de asesinato delart. 139.1ª del C.P., en el límite máximo de veinte años, es dicho límite el que ha de tenerse en cuenta en la imposición de la medida de seguridad que se ha de aplicar de forma alternativa; determinándose la cuantía concreta de dicho límite máximo prescindiendo de la culpabilidad del agente, que es el fundamento de la pena, por no concurrir la culpabilidad dada la inimputabilidad, pero, teniendo en cuenta, sin

embargo, para la determinación de la extensión de la medida de seguridad alternativa a la pena, la peligrosidad del acusado, por ser ésta su fundamento.

En tal sentido, ha de destacarse, que en la apreciación de la alevosía en supuestos como el presente, necesariamente se ha prescindir de la significación subjetiva que ordinariamente se exige a la alevosía, tal como sostiene la Jurisprudencia del TS al respecto. Son exponentes de tal criterio entre otras, las SSTs 1125/2011, de 2 de noviembre, 1019/2010, de 2 de noviembre, 558/2010, de 2 de junio, 482/2010, de 4 de mayo, 47/2004, de 23 de enero, 1176/2003, de 12 de septiembre y 494/2000, de 29 de junio, sentencia esta última que aceptó la concurrencia de la alevosía con la consiguiente calificación de los hechos como asesinato "pese a la carencia en el procesamiento de los soportes mentales necesarios para fijar su culpabilidad".

Por tanto, y siguiendo a la STS 1954/12 de 1 de febrero, resulta plenamente compatible la alevosía con la exigente completa de enajenación mental establecida en el art. 101.1 del C.P, debiendo hacerse abstracción de la dimensión subjetiva de tal circunstancia agravante del art. 139.1ª del C.P., para valorar únicamente su aspecto objetivo, dada la inexistencia de culpabilidad en el declarado exento de responsabilidad penal. Así, desde el Acuerdo del Pleno no Jurisdiccional del TS de 26 de mayo de 2000, a cuyo tenor "en los supuestos de aplicación de la medida de internamiento prevenido para los inimputables en el art. 101.1º del Código Penal, el límite temporal de la medida viene establecido por la tipificación del hecho como si el sujeto fuese responsable, por lo que en supuestos de alevosía el hecho ha de calificarse como de asesinato". Refiere tal STS que "ha afirmado la STS núm. 1019/2010, de 2 de noviembre, que del art. 101.1 C.P. pueden deducirse dos ideas: la primera, que en el Código en vigor late propiamente la exclusión culpabilística del elemento subjetivo del tipo penal cuando tal hecho es cometido por un inimputable, como ocurría en la regulación anterior en el artículo octavo del mismo; la segunda, que para la determinación de la duración temporal de la medida de seguridad habrá de procederse como <<si hubiera sido declarado responsable el sujeto>>, de modo que el Juzgador debe realizar una operación jurídica que califique el hecho como delito, absolviendo, sin embargo al acusado por concurrir esa circunstancia exigente que le convierte en inimputable a efectos penales. Y para esa calificación jurídica no puede prescindirse de las circunstancias agravatorias, si objetivamente concurren, porque existirían también si el sujeto hubiere sido declarado responsable. De manera que su concurrencia determina <<per se>> la cualificación jurídica del encuadre tipológico del hecho como delito de asesinato y, en consecuencia, sirve también para marcar el límite máximo temporal que ha de durar la medida de seguridad". Continúa la STS 1954/2012, refiriendo que "aunque el Acuerdo de esta Sala se refiere únicamente de forma expresa a la alevosía, es obvio que debe entenderse extensible a cualesquiera otras circunstancias agravatorias de similares características", y cita así la STS 482/2010, de 4 de mayo, que así lo apreció respecto de la premeditación, y la STS 47/2004, de 23 de enero y la 345/2007 que equiparan la alevosía y ensañamiento a los efectos de aplicación del Acuerdo del Pleno referido.

En el presente supuesto, la peligrosidad del acusado, Jose Carlos ha quedado evidenciada, por un lado, a partir de la naturaleza y entidad del delito cometido, y de modo especial, en las concretas circunstancias, -de extraordinaria gravedad-, que han sido puestas de manifiesto en su comisión tal como se desprende de los hechos que han sido declarados probados. Asimismo, y, por otro

lado, tal peligrosidad del acusado, resulta de sus concretas características personales, determinadas por una alteración mental denominada Esquizofrenia paranoide, destacándose por los Médicos Forenses que han examinado al acusado en orden a la determinación de su imputabilidad, la cronicidad de dicho trastorno, así como la persistencia de un núcleo delirante, que precisa tratamiento continuo de por vida, de todo lo cual puede deducirse razonablemente y sin vulneración de sus derechos, a la vista de los informes psiquiátricos forenses que parten del historial que presenta el acusado, un pronóstico de comportamiento futuro que revela la probabilidad de comisión de nuevos delitos. Así en el Informe Médico Forense de 12 de diciembre de 2011, al examinar los antecedentes médico psiquiátricos del acusado, en relación al Ingreso del acusado en el Servicio de Psiquiatría del Hospital de Ntra. Sra. de La Candelaria de Tenerife, desde el día 15 de mayo de 2011 hasta el 3 de junio de 2011, conducido por la Guardia Civil desde el Centro Penitenciario, se hace constar que "ya desde que ingresó en el Centro Penitenciario el día 13 de mayo de 2011", -fecha de los hechos-, "presenta trastornos conductuales", que motivaron su remisión a dicho Servicio de Psiquiatría. El informe forense citado refiere que el del Centro Penitenciario hace constar que "desde que ingresó hace dos días, observaron trastornos conductuales, motivo por el que fue remitido a dicho servicio. A su ingreso se observó que se encontraba desorientado y poco colaborador. Tenía inquietud psicomotriz, se mostraba suspicaz, el pensamiento se encontraba desorganizado y con un discurso fluido y coherente aunque con tendencia hacia la disgregación. Se observaron ideación delirante de tipo religioso, de perjuicio, control y vigilancia que ocasionaron gran repercusión emocional y conductual. Existían interpretaciones delirantes y alucinaciones auditivas en consonancia con la temática delirante. No tenía ninguna conciencia de la enfermedad". Por su parte, en el momento del ingreso del acusado en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla, tal como consta en el Informe Médico Psiquiátrico, "el explorado se mostraba perplejo, con mirada distante, actitud cuasi mutista y con inhibición psicomotriz. Se observó en el ingreso la existencia de alucinaciones auditivas a modo de voces de terceras personas percibidas en el interior de la cabeza, que según cuenta "me ordenaban matar", continúa refiriéndose que "desde el ingreso no se han observado alucinaciones auditivas, derivadas del tratamiento neuroléptico que ya traía pautado. Estas ideas sí que las refiere respecto al pasado, observándose un contenido delirante de tipo auto referencial y de perjuicio". El informe forense constata que si bien "durante el ingreso en el mencionado centro el explorado ha ido mejorando a nivel de psicomotricidad y del curso del pensamiento", así como en relación a las "alteraciones sensorio-perceptivas", "sin embargo persiste un delirio estructurado y permanente en el tiempo, pese al tratamiento neuroléptico, de tipo auto referencial y de perjuicio, con contenidos religiosos que el paciente sigue sin hacer crítica de los mismos. Este delirio parece estar en relación directa con los hechos que motivaron su ingreso en prisión, hasta tal punto éste se encuentra convencido de su delirio que cree que la mejoría de su estado mental, sobre todo en el que "ya no escucha voces, son gracias a que maté a esa mujer".

Partiendo de todo lo expuesto, los Médicos Forenses, Drs. Jesús y Luis Antonio, han señalado el internamiento del acusado en un centro cerrado, como en el que está siendo objeto de tratamiento el acusado, -esto es, el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla-, como imprescindible para su tratamiento, dada su patología, su ausencia de control externo e interno, con nula conciencia de la enfermedad y la constancia de que la interrupción del tratamiento psicofarmacológico determinaría la aparición de nuevos brotes psicóticos.

Todo ello, determina un nivel de peligrosidad social

tal que aconseja la adopción de la medida de seguridad de internamiento en centro psiquiátrico penitenciario donde se le proporcione el tratamiento y seguimiento preciso, internamiento cuya duración se ha de establecer en veinte años, atendida dicha peligrosidad social, y sin perjuicio de lo dispuesto en los arts. 97 y 98 del C.P.

En su consecuencia, y ponderando los distintos elementos de valoración anunciados, y en el ámbito del límite temporal determinado por el legislador en el art. 139.1ª del C.Py en aplicación de criterios de proporcionalidad, resulta pertinente aplicar la medida de internamiento de Jose Carlos en Centro o Establecimiento Psiquiátrico Penitenciario de régimen cerrado por tiempo de 20 años, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 97 y 98 del C.P, y de la competencia del Juez de Vigilancia Penitenciaria durante la ejecución de la Sentencia, de las propuestas a las que se refiere el art. 97 del C.P. respecto al mantenimiento, cese, sustitución o suspensión en la ejecución de la medida y a la vista de los informes emitidos por los facultativos y profesionales asignados al control de la misma. Por otra parte, el internamiento acordado no es óbice para que concluido el ámbito temporal de la esfera penal y si persistiere el supuesto de necesidad de tratamiento psiquiátrico pudiera adoptarse un internamiento ulterior en la jurisdicción civil, cuya legitimación, además de los familiares previstos en la Ley, compete al Ministerio Fiscal.

QUINTO .- El Código Penal establece que los responsables criminalmente de un delito lo son también civilmente. Concretamente el art. 109 dice que "la ejecución de un hecho descrito por la ley como delito o falta obliga a reparar, en los términos previstos en las leyes, los daños y perjuicios por él causados". El artículo 118.1 del mismo Texto Legal, por su parte, dispone que la exención de la responsabilidad criminal declarada en el número 1º del art. 20, no comprende la de la responsabilidad civil, que se hará efectiva conforme a las reglas que establece el precepto en y según lo establecido en el art. 119 del C.P.

Respecto a la determinación del quantum de la responsabilidad civil derivada del delito de asesinato, ha de señalarse, en primer lugar, que el derecho a percibir una indemnización nace con ocasión de la muerte de la persona, no es un derecho que forme parte de la herencia y que se transmita con la muerte, de ahí que no tiene por qué coincidir la persona del perjudicado con la del heredero. En segundo lugar, que la pretensión indemnizatoria se rige por el principio de rogación, de modo que el Tribunal se encuentra necesariamente vinculado a la petición que haya sido efectuada, tanto en orden al quantum- no cabe dar más de lo pedido - como en lo relativo a quién ha de darse, pues no cabe reconocer el derecho a persona que no lo haya solicitado. Y, en tercer lugar, y por último, al cuantificar dicho importe una primera aproximación puede llevarse a cabo recurriendo al baremo que regula las indemnizaciones en accidentes de tráfico, y en el que se tienen en cuenta diversos factores, pero no ha de olvidarse que no se trata en absoluto de un supuesto de responsabilidad por culpa ni de responsabilidad objetiva-, que es a lo que propiamente es aplicable el baremo (STC 181/2000, de 29 de junio), ni como consecuencia de un accidente, sino que se trata de una muerte violenta, en concreto, por asesinato, circunstancia que también es relevante para la fijación de la indemnización (art. 1.107 CC) por lo que dicho baremo no es vinculante.

Ciertamente la víctima ya no podrá obtener

resarcimiento de daños y perjuicios, ni habrá nada que pueda resarcir a sus familiares su pérdida, por lo que en tal caso la responsabilidad civil se configura como un acto más de justicia que podrá ayudar a éstos a superar lo acaecido, ya que, sin lugar a dudas, la muerte de Africa , habrá provocado un enorme desconsuelo a sus familiares, en concreto a sus hijas, que tienen derecho a que el autor de la muerte de su madre les indemnice por el daño causado y los perjuicios morales, afectivos, psíquicos y de toda índole que les ha ocasionado.

El valor de la vida de un ser humano como es bien sabido es incalculable y ninguna cantidad puede compensar la pérdida de un ser querido, máxime teniendo en cuenta las circunstancias en que se produjo el fallecimiento de Africa , sin embargo en esta Sentencia debe establecerse una indemnización concreta. En este caso, el Ministerio Fiscal, elevando a definitivas sus conclusiones provisionales, interesó una indemnización de 200.000 euros a favor de las hijas de la fallecida. Por su parte, el Letrado de la Defensa, al calificar provisionalmente los hechos se opuso a cualquier indemnización a favor de las perjudicadas y a cargo de su defendido, sin que en trámite de conclusiones definitivas variara tal extremo, pese a formular calificación alternativa admitiendo la relativa al delito de asesinato.

Partiendo de la edad de la víctima en el momento de su fallecimiento, constatada en la correspondiente Certificación Literal de Defunción, esto es, sesenta años, y de la Tabla I de la Resolución de 20 de enero de 2011, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se publican las cuantías de las indemnizaciones por muerte, lesiones permanentes e incapacidad temporal a aplicar durante 2011 en el sistema para valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, que, como se ha señalado, si bien no es vinculante, sí constituye un criterio al menos orientativo, de carácter objetivo, del que partir para la cuantificación de la indemnización que proceda, correspondería una indemnización, con arreglo al baremo establecido para el Grupo 3 de dicha Tabla, de 54.423,25 euros, más otros 9.070,54 euros, es decir, 63.493,79 euros. Dicha cantidad, en supuestos de asesinato suele incrementarse con el 10% en atención a la antijuridicidad del hecho delictivo determinante del fallecimiento, con lo que resulta un importe de 69.843,169 euros. Sin embargo, atendiendo a las circunstancias concurrentes en el fallecimiento de Africa , que revisten un plus de antijuridicidad, lo que conlleva aparejada un incremento en el quantum indemnizatorio, tal como tiene declarado laSTS de 23 de enero de 2002, se considera razonable fijar en la cantidad de 100.000 euros como responsabilidad civil, que habrá de abonar el condenado a las hijas de la difunta, salvo renuncia expresa de estas últimas. Dicha cantidad habrá de ser incrementada con los intereses legales del art. 576 de la LEC.

SEXTO .- Por preceptiva aplicación de lo dispuesto en el artículo 240.2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 240.1º del mismo Texto, se declaran las costas de oficio.

SÉPTIMO.- La medida de seguridad de internamiento del acusado en Centro o Establecimiento Psiquiátrico Penitenciario de régimen cerrado por tiempo de veinte años que ha sido acordada para tratamiento médico de su dolencia sustituirá a la medida cautelar de prisión provisional que fue acordada en la presente causa, debiendo abonarse en el cómputo de la duración del internamiento el de la prisión provisional cumplida. Por otra parte, dicho internamiento

tendrá el carácter de medida cautelar de internamiento preventivo en Centro o Establecimiento Psiquiátrico Penitenciario de régimen cerrado hasta que la presente Sentencia adquiera firmeza, y se mantendrá con idéntico carácter cautelar de la misma forma para el caso de que sea recurrida la presente hasta el límite de la mitad de la duración de la medida de seguridad que se le impone al acusado, en aplicación del art. 101 y ss. y 504 del C.P, éste último por aplicación analógica en beneficio del reo, y de lo dispuesto en el art. 983 de la LECRIM, dado lo manifestado en los Fundamentos Jurídicos Primero al Quinto de la presente, que justifican la imposición de la medida de internamiento de Jose Carlos en Centro o Establecimiento Psiquiátrico Penitenciario de régimen cerrado, la duración de la medida de seguridad que ha de serle aplicada para su tratamiento, y la necesidad de mantener de forma continua su internamiento para garantizar la finalidad terapéutica de la medida.

Vistas las disposiciones legales citadas y las de general aplicación.

FALLO

Que debo declarar y declaro a Jose Carlos autor del delito de asesinato ya definido, por concurrir la circunstancia agravante de alevosía, apreciando en el mismo la concurrencia de la circunstancia eximente completa de la responsabilidad penal de alteración psíquica del art. 20.1º del Código Penal, por lo que procede el dictado del presente pronunciamiento absolutorio del acusado y se acuerda la medida de seguridad, alternativa a la pena, de internamiento para tratamiento médico psiquiátrico de Jose Carlos en un Centro o Establecimiento Psiquiátrico Penitenciario de régimen cerrado por tiempo de veinte años, durante cuyo periodo de cumplimiento el internado no podrá abandonar el establecimiento asignado sin autorización judicial del Tribunal Sentenciador, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 97 y 98 del C.P., debiendo indemnizar a las hijas de Africa en la cantidad de 100.000 euros con los intereses legales del art. 576 de la LEC, y declarándose de oficio las costas.

Se sustituye la medida cautelar de prisión provisional del acusado por la medida de internamiento que ha sido acordada en la presente resolución. Abónese al internado para el cómputo de la duración de la medida de internamiento el tiempo de prisión provisional cumplido por esta causa. Dicho internamiento tendrá el carácter de medida cautelar de internamiento preventivo en Centro o Establecimiento Psiquiátrico Penitenciario de régimen cerrado hasta que la presente Sentencia adquiera firmeza, manteniéndose de la misma forma para el caso de que sea recurrida la presente hasta el límite de la mitad de la medida de seguridad que le ha sido impuesta.

Dése a las piezas de convicción el destino legal.

Así por esta Sentencia, contra la que puede interponerse recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el plazo de diez días, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN: Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por la Ilma. Sra. Magistrada-Presidente del Tribunal del Jurado, estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha, ante mí, el Secretario Judicial, doy fe.-